

Ni década prodigiosa ni década perdida

GALO BILBAO ALBERDI E IZASKUN SÁEZ DE LA FUENTE ALDAMA

Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto

El reto, tras 10 años sin ETA, es configurar una convivencia más allá de la coexistencia sin violencia, basada en una reconciliación justa

Acaba de cumplirse el décimo aniversario de la declaración del cese definitivo y unilateral de la actividad terrorista por parte de ETA. El recuerdo de esta efeméride y el tiempo transcurrido desde la misma es una nueva oportunidad para reflexionar sobre el terror injustamente padecido durante cinco décadas en nuestra sociedad y extraer algunas conclusiones relevantes para la configuración de su futuro.

El primer aspecto a destacar es la decisión que ETA tomó. Hace diez años, la organización terrorista decidió unilateralmente cesar en su actividad violenta. Ninguna necesidad histórica le llevó a dar tal paso como tampoco ningún mecanismo ineludible le obligó a la puesta en marcha de su macabra y trágica «lucha armada».

La anterior constatación nos exige destacar otra que se deriva de ella: no valiendo la excusa del determinismo histórico –«nos vimos obligados a hacer algo que no queríamos, no había otra opción»–, la ilegitimidad de la actividad terrorista de ETA queda todavía más clara, habida cuenta la inconsistencia de otras justificaciones utilitaristas, éticas o políticas. Ello coloca a quienes han defendido, justificado, alentado y ejercido la violencia ante la ineludible tarea del ejercicio de la autocritica y su incorporación a la mayoría social y política de nuestro país, que tiene como tarea prioritaria la deslegitimación de la violencia, no solamente hacia el futuro, sino también, retrospectivamente, hacia el pasado y no solamente respecto a víctimas inocentes –¿acaso no lo fueron todas?– o a periodos temporales concretos –¿sí en democracia, pero no durante la dictadura franquista?–, pues la violencia de motivación política padecida durante estos cincuenta años ha sido radicalmente injusta, ilegítima.

Ni que decir tiene que esta necesaria autocritica y deslegitimación de la violencia no encaja en absoluto con la celebración de 'ongi etorris' exaltadores de la violencia y de quienes la practicaron.

Por otro lado, también conviene destacar que cualquier aproximación, que merezca el calificativo de ética, a la injusticia y al fenómeno de la violencia como expre-

sión cruel y evidente de la misma debe hacerse desde la asunción de la centralidad y prioridad de las víctimas. No ha sido escaso el camino recorrido por parte de las instituciones en esta senda del reconocimiento, aunque todavía hay muchas lagunas, no solo respecto a las víctimas generadas por ETA sino en relación a otras víctimas de la violencia de intencionalidad política que hemos padecido. Tal vez la sociedad civil todavía está incluso un poco más alejada de todas ellas que las propias instituciones.

Pero, en cualquier caso, lo que conviene destacar ahora es que el derecho de las víctimas a la verdad es una asignatura pendiente y la obligación moral de aportar la mayor luz posible de lo ocurrido por parte de todas las personas que son conocedoras de ello está por encima de cualquier normatividad jurídica, si esta se presenta como argumento –más bien excusa– para no ayudar a desvelar la verdad. La responsabilidad de quienes en algún momento fueron integrantes de ETA es, en este punto, ineludible e intransferible.

Finalmente, percatarnos del hecho de que ha transcurrido ya una década desde el anuncio del abandono del terrorismo por parte de ETA nos tiene que llevar a fijarnos también en que hay ya una generación de personas jóvenes que se han constituido como ciudadanas nuestras libres de la

amenaza permanente de su violencia. Quienes, las menos, tienen conciencia de ello es porque o han sufrido indirectamente sus crueles efectos –familiares de víctimas directas– o sus mayores les han transmitido su memoria personal o han tenido la oportunidad de acceder al testimonio de las propias víctimas a través de las distintas iniciativas institucionales.

Pero, repetimos, son las menos y la inmensa mayoría de ellas ignoran nuestro pasado más reciente, a pesar de la proliferación de meritorios productos culturales (largometrajes, miniserias, documentales, cómics y novelas). Tenemos por delante el gran reto de transmitir una memoria justa y verdadera a las personas más jóvenes y de hacer del aprendizaje de la historia una auténtica educación en la conciencia crítica que permita combatir la subcultura de la violencia y del odio.

La sociedad vasca en su conjunto, y todas y cada una de las personas que la integramos, tiene una responsabilidad y tarea concreta ante el reto de, tras diez años de ausencia del terrorismo de ETA, configurar una convivencia más allá de la coexistencia sin violencia directa, basada en una reconciliación justa y posible. Ese deseable trayecto solo es factible desde un inequívoco compromiso por la deslegitimación de la violencia, pasada, presente y futura. Está en nuestras manos.